

4-1-2008

## Dinámicas de Antiguo Régimen: el gobierno de la República de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII

Romina Zamora

Follow this and additional works at: <https://digitalrepository.unm.edu/clahr>

---

### Recommended Citation

Zamora, Romina. "Dinámicas de Antiguo Régimen: el gobierno de la República de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII." *Colonial Latin American Historical Review* 17, 2 (2008): 163. <https://digitalrepository.unm.edu/clahr/vol17/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Colonial Latin American Historical Review by an authorized editor of UNM Digital Repository. For more information, please contact [amywinter@unm.edu](mailto:amywinter@unm.edu).

# Dinámicas de Antiguo Régimen: el gobierno de la República de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII

---

ROMINA ZAMORA

El funcionamiento del cabildo y del gobierno de la ciudad de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII es considerado de acuerdo a la conformación institucional del cabildo y los conflictos generados en éste, a raíz de la aplicación de reformas finiseculares. Se entiende que la autonomía de las ciudades y la participación del vecindario urbano en las decisiones que tenían que ver con el orden local eran una tradición arraigada en la estructura hispánica de gobierno y no una innovación de corte liberal. Para analizar el gobierno de las ciudades y las relaciones entre el gobierno local y el rey entre los siglos XVI y XVIII, las nuevas corrientes historiográficas proponen algunos conceptos novedosos. Éstos modifican sustancialmente la consideración que se ha tenido, hasta hace poco, acerca del funcionamiento político de las ciudades hispanoamericanas,<sup>1</sup> y de las novedades que vino a introducir la Revolución porteña de 1810. Primero, la República de Antiguo Régimen (en adelante, la República) era un concepto referido al cuerpo político propio de la ciudad, compuesto por el cabildo y las corporaciones existentes en ella, esto es, los vecinos y sus privilegios. Segundo, la autonomía relativa de los cabildos en el gobierno de la ciudad y su jurisdicción, tanto en la península como en Hispanoamérica, no era una anomalía política sino que era parte del marco jurídico de las relaciones entre el rey y las múltiples corporaciones de las ciudades, con las que debía negociar constantemente.<sup>2</sup>

Annick Lempérière, en el año 2004, proponía el concepto de "monarquía corporativa" para hacer referencia al "corporativismo"

---

<sup>1</sup> En este caso, ciudades rioplatenses, tucumanas y cuyanas.

<sup>2</sup> Annick Lempérière, *Entre Dieu et le roi, la république: Mexico, XVIe-XIXe siècle* (Paris: Belles Letters, 2004); Antonio Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europea: síntesis de un milenio* (Madrid: Tecnos, 2000); y Carlos Garriga, *Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen*. Disponible en <http://www.istor.cide.edu/revistaNo16.html>; consultado el 29 de junio de 2010.



como una categoría descriptiva de la historia social y política del Antiguo Régimen. En un acercamiento a las estructuras políticas del siglo XVIII en Nueva España, esta propuesta tenía el propósito fundamental de extender el status de institución política a todos los cuerpos, en cuyo seno se asociaban los diversos componentes del pueblo de las ciudades.<sup>3</sup> Las corporaciones eran parte integrante de un modo de gobierno, consustanciales a la institución monárquica, que les proveía de regalías y beneficios en una cultura jurídica signada por la jerarquización, la diferencia y los privilegios. Los vecinos de las ciudades detentaban representación a través de su cuerpo político, la República, que tenía una importante capacidad de autogobierno. La autonomía de las ciudades y el autogobierno local eran tradiciones arraigadas dentro del consenso entre las ciudades y la monarquía, que resistieron los embates del reformismo borbónico.<sup>4</sup>

Así, las nuevas tendencias del estudio del pasado renuncian a usar cualquier referencia al Estado hasta el siglo XVIII, ya que el hecho de pensar a la monarquía de Antiguo Régimen como un estado "ha dificultado la comprensión del carácter y relevancia de las instituciones de ámbito municipal, tanto en el caso americano como en el de su modelo de referencia, es decir, el castellano."<sup>5</sup> La novedad consiste en pensar en los mecanismos reguladores de la monarquía como un *ensemble des contraintes*, es decir, un complejo entramado de negociaciones y obligaciones recíprocas entre la Corona y las corporaciones de las ciudades castellanas y de los reinos dependientes y virreinos. El considerar que la república local estaba a cargo del gobierno de la ciudad no significa una anomalía política sino que equivale a una tradición de autogobierno municipal corporativo, consustanciada con la tradición hispánica de Antiguo Régimen.<sup>6</sup>

La composición institucional del cabildo de la ciudad de San Miguel de Tucumán en el siglo XVIII, tanto como sus funciones, ha

---

<sup>3</sup> Lempérière, *Entre Dieu et le roi*, 17.

<sup>4</sup> Antonio Annino, "Imperio, constitución y diversidad en la América hispana," *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates* (2008). Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/index33052.html>; consultado el 7 de noviembre de 2008. Es importante considerar el giro que ha tenido la conceptualización propuesta por Annino en este nuevo artículo, que difiere de sus escritos anteriores.

<sup>5</sup> Alejandro Agüero, "Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen: la tradición castellana," *Cuadernos de Historia* 15 (2005):239.

<sup>6</sup> Lempérière, *Entre Dieu et le roi*, 17; y Carlos Garriga, "Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV," en *La América de Carlos IV: Cuadernos de Investigaciones y Documentos*, ed. Eduardo Martiré (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2006), 35-130.



sido trabajada por la historiografía con desiguales resultados. Una línea teórica que analiza el espacio político y las funciones del cabildo los observa a la luz de los principios liberales y aplicando las categorías analíticas de legalidad-legitimidad, amigo-enemigo. Este análisis, si bien puede ayudar a comprender la trama de relaciones que se tejían entre los actores políticos, corre el riesgo de soslayar cuestiones relacionales, institucionales o jurídicas propias del Antiguo Régimen, calificando, por ejemplo, como "permanencias ostentosas" la repetición de los mismos nombres en cargos que, de suyo, eran venales. Con un acervo teórico diferente, Gabriela Tío Vallejo ha realizado un examen jurídico y conceptual de las instituciones, la justicia y la representación del siglo XVIII considerando las conceptualizaciones del propio momento histórico, observando el impacto de las reformas borbónicas en el cabildo y de qué manera aquellas medidas contribuyeron a reforzar su autonomía.<sup>7</sup>

La centralidad de las ciudades en la organización política de la monarquía fue innegable. La ciudad, conceptualmente, era la reunión de vecinos y había sido utilizada como el vehículo de la reconquista peninsular y la conquista americana. En tanto, representaba a la comunidad católica perfecta. La ciudad se consideraba el centro de control y de dominio del territorio, por lo que morar en ella era la condición de visibilidad desde la teoría jurídica y para la actividad política. Ésta representaba, precisamente, "el elemento germinativo de una realidad política, social, económica y administrativa que enmarcaba la construcción y determinaba el desarrollo de gran parte de

<sup>7</sup> Irene García de Saltor, *La construcción del espacio político: Tucumán en la primera mitad del siglo XIX* (Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, 2003), 23-28; y Gabriela Tío Vallejo, *Antiguo Régimen y liberalismo: Tucumán, 1770-1830* (Tucumán: Cuaderno Humanitas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2001). Véase también Gabriela Tío Vallejo, "Los 'vasallos más distantes': justicia y gobierno, la afirmación de la autonomía capitular en la época de la Intendencia, San Miguel de Tucumán," en *Dinámicas de antiguo régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX*, ed. Marco Bellingeri (Torino: Otto Editore, 2000); Gabriela Tío Vallejo, "La buena administración de justicia y la autonomía del cabildo: Tucumán, 1770-1820," *Boletín Instituto Ravignani* 18 (1998):35-58. Véase también Romina Zamora, "El vecindario y los oficios de gobierno en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII," *Revista de Historia del Derecho* 35 (2007):457-79; y Romina Zamora, "El cabildo 'Justicia y Regimiento' de San Miguel de Tucumán ante las reformas jurisdiccionales del siglo XVIII," en *Identidades, representación y poder entre el antiguo régimen y la revolución: Tucumán, 1750-1850*, ed. Cristina del Carmen López (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2009), 45-62.



la realidad americana."<sup>8</sup> Dentro del espacio jurídico de la monarquía católica, la ciudad era, sin lugar a dudas, el espacio donde se escenificaban las relaciones de poder. En el ámbito político que representaba la ciudad, se proyectaba la confluencia de poderes propia de la monarquía corporativa: el rey, la Iglesia y la República. La imagen de la ciudad—el paisaje urbano del siglo XVIII—estaba organizada para exhibir los símbolos físicos del poder ante el público de Antiguo Régimen. En realidad, estas ciudades muchas veces eran poco más que la residencia nominal de los vecinos, que se pasaban la mayor parte de tiempo en sus estancias y feudos. La ciudad, como expresión del orden y como fuente de derecho, era independiente de su magnitud física y su efectivo poblamiento.

Era imposible separar la traza urbana de su jurisdicción, ya que la mayoría de la población en los siglos XVI, XVII y XVIII residía en la campaña, donde realizaban lo principal de las actividades productivas. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, al menos el 80 por ciento de la población de la región del Tucumán tenía su residencia habitual en la campaña y alternaban su residencia entre la ciudad y la campaña. A su vez, la propia población urbana no puede ser comprendida sin considerar los incesantes movimientos migratorios y de circulación a través de todo el espacio español en América y con relación a los espacios indígenas.

Las ciudades y sus cuerpos políticos desarrollaron al máximo sus posibilidades de autogobierno y de injerencia en la estructura monárquica. En la praxis cotidiana de la mayoría de las ciudades hispanoamericanas, la República se extendía territorialmente hasta donde podía llevar la jurisdicción de sus jueces pedáneos y alcaldes de Santa Hermandad. Pero conceptualmente, la República incorporaba al ámbito de su justicia a la gran mayoría de los conflictos que la justicia

---

<sup>8</sup> Juan Marchena Fernández, "El poder y el espacio urbano en la ciudad americana del siglo XVIII: un vector de análisis," en *Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica*, ed. José Luis Peset Reig (Madrid: CSIC, 1989), 2:543. Véase también Louisa Schell Hoberman y Susan Migden Socolow, eds., *Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial* (México: Fondo de Cultura Económica, 1993); Richard Morse, "El desarrollo urbano de la Hispanoamérica colonial," en *Historia de América Latina*, ed. Leslie Bethell (Barcelona: Editorial Crítica, 1990), 3:15-48; Miguel Guérin, "La organización inicial del espacio rioplatense," en *Nueva Historia Argentina*, ed. Enrique Tandeter (Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 2000) 2:13-54; Marcello Carmagnani, "Componentes sociales, siglos XVIII-XIX," en *Para una historia de América*, ed. Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez y Romano Ruggiero (México: Fondo de Cultura Económica, 1999), vol. 2; y Magnus Mörner, "Algunas reflexiones sobre historia y espacio," *Población y Sociedad* 3 (1995):21-34.



de primera instancia, a cargo de los alcaldes ordinarios, resolvió. De esta manera, los vecinos mantenían el equilibrio de su propio cuerpo social, en un orden considerado como divino y en la medida en que hacer justicia equivalía a restablecer y conservar ese orden natural. Las corporaciones de vecinos entendían las prerrogativas de autogobierno y de la administración de justicia como el reconocimiento, por parte de la Corona, del derecho del cuerpo político local a resguardar, legal y jurídicamente, el orden divino del que ellos eran parte. Así, el gobierno y la administración de justicia de la ciudad y su jurisdicción estaba a cargo de su propio cuerpo político y tenía la doble obligación de brindar servicios al rey y servicios al pueblo, en pos del "bien común."<sup>9</sup>

Dentro del orden jurídico, el bien público constituye la finalidad principal de las decisiones y las acciones del gobierno temporal. Es por eso que el autogobierno de las repúblicas urbanas no era una contradicción ni una excepción dentro de la organización del poder en la monarquía católica, sino parte de la tradición hispánica de la relación entre los poderes del rey y las repúblicas urbanas.<sup>10</sup>

Fundamentalmente, para ser reconocida como ciudad, la población debía contar con un cabildo, encargado de la justicia y el regimiento. Dicho de otra manera, el cuerpo, tanto de la república de españoles como de la república de indios, necesitaba del cabildo como su cabeza. La razón de ser del cabildo era procurar el bien común para los vecinos y pobladores de su jurisdicción. En función de esto debía atender a la justicia y al gobierno económico y regimiento político de la ciudad. La función de regimiento constituía una de las atribuciones consideradas como privativa de los pueblos y era el propio cuerpo político de la ciudad quien debía encargarse de la administración de sus bienes y sus relaciones. Justicia y regimiento eran funciones que se complementaban mutuamente para consolidar el espectro de autoridad indiscutible de la corporación de vecinos a nivel territorial.

Los regidores perpetuos sustentaban la mayor parte del poder en el seno del cabildo. Este grupo de regidores conformaba el estrato más influyente de la corporación de vecinos, y se puede considerar que la detentación del empleo era un elemento de distinción social reservado a los miembros más prominentes de la ciudad. Así se refería a ellos Jerónimo Castillo de Bovadilla:

<sup>9</sup> Lempérière, *Entre Dieu et le roi*, 17-18.

<sup>10</sup> Véase la obra de Annino, "Imperio, constitución y diversidad."



Es tanta la calidad de los Regidores, que representan el pueblo, y son toda la ciudad, y cabeça della, y pueden introducir costumbre, como dizen Baldo y otros, porque aunque es verdad, que en la congregacion y universidad de todo el pueblo (que se llama concejo abierto) residia la mayoria y superioridad, pero ya por costumbre reside en los Ayuntamientos y consejos [*sic*] los quales solos pueden todo lo que el pueblo junto....<sup>11</sup>

Esto ha sido señalado también como un elemento central en la composición de los cabildos en otras latitudes.<sup>12</sup> Los regidores encarnaban las figuras más representativas de esta concepción del gobierno y del orden del Antiguo Régimen, en tanto el poder político estaba sostenido por el poder social, y en cuanto la legitimidad del cuerpo político de la ciudad estaba sustentada por la autoridad doméstica de sus miembros. Esa autoridad de la que gozaba el padre hacia el interior de la familia, para tener proyección sobre el gobierno de la ciudad, primero debía ser reconocida por la corporación, por la vecindad.<sup>13</sup>

En San Miguel de Tucumán, los de regidores eran oficios perpetuos, vendibles y renunciables, pero no funcionaba necesariamente así en todas las ciudades. Aquí, los oficios de regidor eran cuatro o a veces cinco: un alcalde mayor provincial, que dependía directamente del gobernador, un alguacil mayor, un fiel ejecutor, un

<sup>11</sup> Jerónimo Castillo de Bovadilla, *Política para corregidores y señores de vassallos, en tiempo de paz, y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares, jueces de comisión, regidores, abogados y otros oficiales públicos* (1597 y 1704; reimpresión, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1978), Lib. III, Cap. VIII, no. 18, 2:121.

<sup>12</sup> Véase J. Manuel Santos Pérez, *Élites, poder local y régimen colonial: el cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787* (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2000). Para los regidores en los cabildos andinos, véase Luis Guillermo Lumbreras, Manuel Burga y Margarita Garrido, *Historia de América andina* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Libresa, 1999).

<sup>13</sup> Véase Daniela Frigo, *Il padre di famiglia: governo della casa e governo civile nella tradizione dell' "economica" tra Cinque e Seicento* (Roma: Bulzoni, 1985); Otto Brunner, "La 'casa grande' y la 'oconomía' de la Vieja Europa," en *Nuevos caminos de la historia social y constitucional* (Buenos Aires: Alfa, 1976); Victor Tau Anzoátegui, *Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y Cuyo (época hispánica)* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004); Antonio Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europea: síntesis de un milenio* (Madrid: Editorial Tecnos, 2000); y Bartolomé Clavero, *El orden de los poderes: historias constituyentes de la trinidad constitucional* (Madrid: Editorial Trotta, 2007).



regidor 24 y, eventualmente, un alférez real.<sup>14</sup> Estos regidores, junto a los dos alcaldes ordinarios, elegían a quienes cubrirían los oficios anuales. Éstos eran los alcaldes ordinarios de 1° y 2° voto y los dos alcaldes de Santa Hermandad, el tasador de costas, que era electivo pero recaía normalmente en la misma persona, y el defensor general de menores y pobres. Así, los regidores nombraban a los alcaldes, que estarían a cargo de la justicia, y a los demás empleos especiales. De esta manera, los que tenían la autoridad social y la capacidad económica en la ciudad determinaban quiénes detentarían la potestad jurisdiccional. Esto generaba una tensión irresuelta entre la potestad del rey y la potestad de la corporación: el rey era la fuente última de toda jurisdicción, pero la corporación elegía a quiénes iban a ejercerla.<sup>15</sup>

En este sentido se puede analizar la multiplicación de los alcaldes de barrio y de Santa Hermandad, cuyo nombramiento estaba a cargo de la república local a través del cabildo y no del rey. Esta situación ha sido interpretada como parte del aumento de autonomía obtenida por el cabildo de San Miguel de Tucumán y su cuerpo político con relación a la autoridad real hacia fines del siglo XVIII.<sup>16</sup> Al observar la composición social del cuerpo capitular entre 1795 y 1806, se nota que había por lo menos tres niveles de consideración de sus oficios elegibles. En primer lugar, están los cargos citados de procurador y alcaldes ordinarios. Estos empleos eran cubiertos por vecinos que estaban en el centro de las redes sociales que conformaban la República. En segundo plano, se situaban aquellos que podían ocupar indistintamente los cargos de alcaldes provinciales de Santa Hermandad y de defensor general de menores y pobres. Salvo honrosas excepciones, estos cargos eran ocupados por parientes cercanos de los primeros: vecinos que pertenecían a la red social de notables de la ciudad pero que no ocupaban un lugar central. La tercera línea estaba

<sup>14</sup> Jochen Meissner, "La introducción de los regidores honorarios en el cabildo de la Ciudad de México," en *Actas XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997); y Romina Zamora, "La burocracia borbónica y la Ordenanza de Intendentes en San Miguel de Tucumán y su jurisdicción," en *Actas IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia*. Publicación digital (en CD) (2003). "Regidor 24" se refiere al nombre del cargo.

<sup>15</sup> Constantino Bayle, *Los cabildos seculares en la América española* (Madrid: Sapientia, 1952); y Carlos Garriga, "Justicia animada: dispositivos de la justicia en la monarquía católica," en *De justicia de jueces a justicia de Leyes: hacia la España de 1870*, ed. Marta Lorente Sariñena (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2007).

<sup>16</sup> Tío Vallejo, *Antiguo Régimen y liberalismo*, 125.



representada por empleos de alcaldes de barrio y de Santa Hermandad. Con una mayor dispersión de apellidos y habitualmente emparentados entre sí, los vecinos que cubrían estos oficios participaban de manera tangencial dentro de la corporación de vecinos. Muchas de éstas eran personas de incorporación reciente en el vecindario y de alguna manera el cabildo se había ampliado para poder darles cabida dentro del espacio político de reconocimiento.<sup>17</sup>

Los cargos que significaban mayores honores eran conferidos sucesivamente a los miembros de las familias más principales, en tanto las menos principales ocupaban los empleos de segundo rango y los más nuevos ocupaban los empleos recientemente creados. Así, se hace visible que los oficios capitulares no respondían a una lógica de carrera administrativa sino a una lógica republicana de honores, que en el ámbito castellano "supone que *todos* los miembros del pueblo participan en el gobierno según su mérito, concediendo a los *mejores* los honores y magistraturas," tal como era la formulación de juristas del siglo XVI. Así puede entenderse el alegato de Salvador Alberdi, quien, para justificar la multiplicación de los empleos de alcaldes de Santa Hermandad, sostenía que "cualquier vecino condecorado...ve este cargo como *prueba compensativa de su verdadero mérito*...."<sup>18</sup> De esta manera se proyectaba en el cabildo el mismo ordenamiento jerárquico de las familias tal como se presentaba en la constitución de la sociedad. Los nuevos hombres incorporados a la corporación de vecinos tenían una posición marginal dentro del cabildo mientras que las familias principales, que estaban en el centro de los honores, el prestigio y las redes de relación, seguían guardando para sí el lugar de la notabilidad.

Tal como afirma Antonio Manuel Hespanha, "la centralidad política del mundo doméstico sería evidente si no fuera por los efectos del enmascaramiento producido por la ideología estatalista."<sup>19</sup> Así es que, al pensar el poder y el gobierno durante el Antiguo Régimen, se observa que el gobierno de la ciudad no era tanto una estructura

<sup>17</sup> Véase Anexo 1.

<sup>18</sup> Formulación de Juan Antonio de Ahumada y Juan de Mariana. Citado por Carlos Garriga, "Plazas criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV," en Martíre, *La América de Carlos IV*, 77 y 78; énfasis añadido por la autora. Justificación de Salvador Alberdi, Archivo Histórico de Tucumán (en adelante citado como AHT), Sección Administrativa, vol. XII, fols. 74-76. Citado por Gabriela Tío Vallejo, "Presencias y ausencias del cabildo en la construcción del orden provincial: el caso de Tucumán, 1770-1830," *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades* 9:18 (2007). Disponible en [http://www-en.us.es/araucaria/nro18/monogr18\\_7.htm](http://www-en.us.es/araucaria/nro18/monogr18_7.htm); consultado el 1 de abril de 2009. Énfasis añadido por la autora.

<sup>19</sup> Hespanha, *Cultura jurídica europea*, 40.



burocrática como una administración de la economía y las relaciones políticas montada sobre relaciones familiares. Más que absoluto e indiscutido, el poder monárquico se sostenía a partir de una política de compromisos y negociaciones con los demás poderes sociales, encarnados en las corporaciones. Esta era la base del consenso de Antiguo Régimen que en América sumaba además no sólo la distancia que favorecía a la relajación de los vínculos de dominio sino también las características devenidas de la situación de conquista—el consenso colonial.<sup>20</sup>

Las reformas impulsadas por los Borbones a partir de mediados del siglo XVIII buscaron modificar ese *ensemble des contraintes* logrado por los Austrias entre la Corona y las corporaciones, e incluso el consenso colonial con los cuerpos de notables en las ciudades americanas. En América, las reformas incluso alteraron la condición jurídica de los virreinos, que pasaron de ser reinos a ser "posesiones de ultramar," categoría que podría considerarse como el status colonial propiamente dicho. La categoría de colonial no era parte de un discurso explícito por parte de la Corona sino que era intrínseca a las prácticas progresivamente institucionalizadas que tuvieron su cenit a fines del siglo XVIII.<sup>21</sup>

Los últimos estudios realizados sobre el tema matizan la idea tradicional acerca del alcance y los resultados logrados por las reformas aplicadas en el gobierno hispanoamericano durante la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente durante el último cuarto del siglo. En efecto, si las transformaciones en el gobierno impulsadas por los Borbones fueron implementadas como una forma de sanear la administración americana y en contra de la centralidad lograda por los cuerpos políticos locales, terminaron siendo fagocitadas por las mismas corporaciones que buscaba combatir. Así, si bien desmontaron el consenso en la relación entre el rey y las repúblicas y demás corporaciones, no acabaron con el sistema de compromisos como

<sup>20</sup> Sobre el consenso colonial, véase Juan Marchena Fernández, "La construcción del poder colonial en los Andes," en *América Latina. De los orígenes a la Independencia II: la sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII*, ed. Juan Carlos Garavaglia (Barcelona: Crítica, 2005), 225. Véase también Diana Cevallos Gómez, "Gobernar las Indias: por una historia social de la normalización," *Ius Commune* 25 (1998):181-218.

<sup>21</sup> Véase, por ejemplo, Horst Pietschmann, *Las reformas borbónicas y el sistema de Intendencias en Nueva España: un estudio político administrativo* (México: Fondo de Cultura Económica, 1972); y François-Xavier Guerra, *Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas* (Madrid: Editorial MAPFRE, 1992).



forma de gobernar sino más bien al contrario. A la larga, crearon un nuevo consenso social y una nueva estructura de gobierno.<sup>22</sup>

Una de las modificaciones más visibles en el sistema de gobierno en Hispanoamérica fue la implementación de agencias y juntas y la correspondiente multiplicación de los empleos. Los nuevos ramos, las agencias y juntas constituían toda una nueva estructura que regulaba la producción, la industria y el comercio.<sup>23</sup> Esta era una nueva forma de considerar a la función de las oficinas reales no sólo en el control sino también en el fomento de la producción de riquezas; ya no sólo incluían impuestos, aduanas y comercio, sino también la agricultura, la industria o artes y el comercio. En los fundamentos de las reformas había una noción específica de la economía política que estaba también en las bases del constitucionalismo español.<sup>24</sup> En un texto donde se delineaban las tareas irrenunciables a emprender por el

---

<sup>22</sup> Scarlett O'Phelan Godoy, ed., *El Perú en el siglo XVIII: la era borbónica* (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 1999); Jaime E. Rodríguez O., *La independencia de la América española* (México: El Colegio de México, 1996); y Antonio Annino y François-Xavier Guerra, eds., *Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX* (México: Fondo de Cultura Económica, 2003).

<sup>23</sup> Los nuevos ramos: Hacienda, Marina y Guerra, Justicia, Cruzadas. Las agencias y juntas: Virreinato, Intendencia, Audiencia, Secretaría de Gracia y Justicia, Tribunal de Cuentas, Secretaría de Guerra y Hacienda, de la que dependían Aduanas, Tabacos, Correo, Propios y Temporalidades. Susan Migden Socolow, *The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: amor al real servicio* (Durham: Duke University Press, 1987), 31. Véase también José Francisco Gálvez, "Burócratas y militares en el siglo XVIII," en O'Phelan Godoy, *El Perú en el siglo XVIII*. Para una discusión semántica en torno a la terminología aplicable, véase José María Mariluz Urquijo, *El agente en la administración pública en Indias* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998). Para los efectos de las reformas en la ciudad de Córdoba, véase Ana Inés Punta, *Córdoba borbónica: persistencias coloniales en tiempo de reformas, 1750-1800* (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1997). Para el estudio de las tensiones y conflictos en la ciudad de Salta en torno a la instalación de la capital de Intendencia, véase Marcelo Marchionni, "Una elite consolidada: el cabildo de Salta en tiempos de cambios," en *Persistencias y cambios: Salta y el Noroeste argentino, 1770-1840*, ed. Sara Mata de López (Rosario: Prohistoria y Manuel Suárez, 1999). Para San Miguel de Tucumán, véase Cristina López de Albornoz, *Los dueños de la tierra. Economía, sociedad y poder: Tucumán, 1770-1820* (Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2003); Tío Vallejo, "Los vasallos más distantes;" y Zamora, "La burocracia borbónica."

<sup>24</sup> Estas actividades productivas no eran englobadas bajo la calificación de "económicas," en tanto "economía" se refería a la administración de la casa, es decir, doméstica. José María Portillo Valdés, "Entre la historia y la economía política: orígenes de la cultura del constitucionalismo," en *Historia y constitución: trayectos del constitucionalismo hispano*, ed. Carlos Garriga y Beatriz Rojas (México: Centro de Investigación y Docencia Económica, El Colegio de México, 2010).



príncipe perfecto para España, escrito por Valentín de Foronda, publicado en 1821 pero con versiones anteriores de 1788 y 1790, éste expresaba que "la legislación que estableciera la libertad de producir y de comerciar, o que removiera, como dirá Jovellanos, todo obstáculo natural, legislativo o moral opuesto a esa libertad era un imperativo constitucional para el príncipe."<sup>25</sup>

Esta resultaría en una de las novedades y el punto de inflexión de las reformas borbónicas del último cuarto del siglo XVIII con las tradiciones de gobierno pretéritas, ya que en el fondo contenían, por un lado, la idea del gobierno económico en manos del rey y no como función privativa de la República. Por otro lado, llevaban la idea de que la felicidad de los pueblos dependía del desarrollo de las actividades productivas de los hombres y su buen fomento y administración por parte del gobierno.<sup>26</sup> El establecimiento de nuevas oficinas que dependían directamente de la Corona atacaba la base del status quo de las relaciones entre el rey y las corporaciones locales y también implicaba limitar los privilegios particulares en pro de la felicidad del público.

Las reformas borbónicas en la administración de la América española multiplicaron el número de oficios desde mediados del siglo XVIII, aunque el principal aumento ocurrió en el último cuarto del siglo, después de la creación del Virreinato del Río de la Plata y de la aplicación del Régimen de Intendencias. Ellas implicaban la creación de una multitud de nuevos cargos con jurisdicciones extraordinarias y la extensión de fueros para estos nuevos agentes.<sup>27</sup> El crecimiento de este conjunto de burócratas de segunda línea ha sido marcado por Susan Socolow para el espacio del Virreinato del Río de la Plata, observando que si al comienzo casi la mitad de los cargos eran principales, a principios del siglo XIX, los cargos secundarios eran el 75 por ciento del total de los empleos.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Citado por José María Portillo Valdéz, "Constitucionalismo antes de la Constitución: la economía política y los orígenes del constitucionalismo en España," en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Coloquios (2007):29. Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/4160>; consultado el 14 de febrero de 2011.

<sup>26</sup> Lempérière, *Entre Dieu et le roi*, 150.

<sup>27</sup> Este es un tema que de manera reciente está despertando el interés en los investigadores: el estudio de la multitud de nuevos agentes en los niveles más bajos de esas agencias y juntas en los espacios de la gobernación tucumana.

<sup>28</sup> Marcelo Marchionni, "Una elite consolidada," Bárbara M. Aramendi, "Gabriel Güemes Montero: funcionario ilustrado y vecino respetable," *Andes* 19 (2008):159-82; y Socolow, *Bureaucrats of Buenos Aires*.



Los altos empleos tenían una importante participación en la vida económica local, "verdaderos árbitros de una vida mercantil marcada por la inseguridad jurídica en la medida en que los negocios realmente legales constituían una estricta minoría del volumen total."<sup>29</sup> Los empleos bajos permitían a cada oficial hacer carrera. Pero en conjunto, eran cargos cubiertos por miembros marginales de la corporación de vecinos o por recién llegados a la ciudad que no tuvieron posibilidad de incorporarse de otra forma a su cuerpo político. Para la ciudad de San Miguel de Tucumán, es posible hallar registro de numerosos cargos de esta administración, con distintos grados de responsabilidades y probablemente algunos hayan tenido poca o nula función efectiva.<sup>30</sup> Este tipo de cargos administrativos eran requeridos aunque no tuviesen aplicación. Las ventajas más evidentes que proporcionaban esos cargos eran precisamente los fueros y la posibilidad de evadirse de la justicia ordinaria de la ciudad. Por otro lado, significaban una nueva forma de relacionarse con la autoridad y la posibilidad, otra vez, de hacerse visible a la corporación de vecinos, montando una estructura novedosa de poder, con la que los vecinos tenían necesariamente que negociar.

El objetivo de estas reformas borbónicas consistió aquí en reducir el espacio materialmente ocupado por la justicia para construir "otro aparato cuyo eje era el *Intendente*, servido por *hombres nuevos* para el *gobierno económico* y con criterios administrativos."<sup>31</sup> Por una parte, la ordenanza fue concebida como un sistema que fortaleciera progresivamente el poder real, plateando una ruptura con consenso tradicional. Por otra parte, se buscó implementar un nuevo concepto de agente de gobierno, una burocracia más profesional y más técnica que asegurara para el rey un mejor manejo de los recursos públicos y que respondieran a las estrictas órdenes emanadas por el rey.<sup>32</sup> Zacarías

<sup>29</sup> Zacarías Moutoukias, "Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800," en Tandeter, *Nueva Historia Argentina*, 379.

<sup>30</sup> Excusas de los vecinos para aceptar cargos públicos, 1800, Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelante citado como AGN), Tribunales, leg. 234, exp. 17.

<sup>31</sup> Carlos Garriga, "Los límites del Reformismo Borbónico: a propósito de la administración de justicia en Indias," en *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas. Actas XII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, ed. Feliciano Barrios Pintado (Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002), 1:818; énfasis añadido por la autora.

<sup>32</sup> Sobre el carácter de sistema y las coherencias/incoherencias de la Ordenanza de Intendentes, véase Rafael García Pérez, "El intendente ante la tradición jurídica indiana ¿continuidad o ruptura?" en *Reformismo y sociedad en la América borbónica: in memoriam Ronald Escobedo*, ed. Pilar Latasa (Pamplona: Ediciones Universidad de



Moutoukias cuestiona si se trataba realmente de un nuevo concepto en los empleos públicos: "Esos hombres eran oficiales y magistrados, y administrar era sobre todo administrar justicia. Como jueces de su jurisdicción, se interesaban en el respeto de la normativa vigente. Por su posición social, eran ellos quienes estaban en mejores condiciones para transgredirlas y eran quienes más frecuentemente las transgredían."<sup>33</sup>

Por su parte, las figuras de los intendentes generaron profundos descontentos entre los miembros del cuerpo político tradicional. En el Virreinato del Perú, el teniente del intendente denunciaba que "los [intendentes se] constituyeron en deidades impenetrables que celosas de su propia autoridad, se abrogaron todo género de facultades de que los mismos virreyes tuvieron que desentenderse." Este oficial reclamaba que la Jurisdicción tanto civil como criminal, debía ser ejercida por el teniente de letras, es decir, por él mismo, y no por el intendente, que de hecho la ejercía: "Nunca han querido estos desprenderse de ella, por reunir en sí toda la abusiva y despótica autoridad posible."<sup>34</sup>

En San Miguel de Tucumán, la tensión entre el poder central y el local se puede observar, sobre todo, después del establecimiento de la capital de la Gobernación Intendencia en la cercana ciudad de Salta. Los roces eran tanto con los delegados del gobernador como con el gobernador mismo, ya sea a nivel institucional con decisiones que afectaban a la estructura del cabildo como a nivel interpersonal, interviniendo directamente en la constitución de la República. Más allá de las tareas intrínsecas a la función del gobernador para con una institución capitular situada bajo su autoridad, entre 1795 y 1800 se hizo evidente la existencia de fricciones entre la institución real del gobierno-intendencia y la local del cabildo. El gobernador intendente

---

Navarra, 2003), 109; y María Laura San Martino de Dromi, *Intendencias y provincias en la Historia Argentina* (Buenos Aires: Ed. Ciencias de la Administración, 1990). Véase también Jorge Gelman, "La lucha por el control del estado: administración y elites coloniales en Hispanoamérica," en *Historia General de América Latina*, ed. Enrique Tandeter y Jorge Hidalgo Lehuédé (Paris: Ediciones Unesco, 2000), vol. 4; y Gálvez, "Burócratas y militares en el siglo XVIII." Para una discusión en torno a la terminología aplicable a los agentes de la administración en Hispanoamérica, véase Mariluz Urquijo, *El agente en la administración pública en Indias*.

<sup>33</sup> Moutoukias, "Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata;" y Pietschmann, *Las reformas borbónicas*, 185.

<sup>34</sup> "Oficio de Antonio Luis Pereyra al rey, 1809," en *Mayo Documental*, ed. Ricardo Rodolfo Caillet-Bois (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1961-1965), 10:192.



negó el tratamiento de Ilustre al cabildo de San Miguel de Tucumán en 1795. En el mismo año determinó la cantidad de alcaldes de Santa Hermandad que el cabildo podía elegir, sin considerar las elecciones ni las decisiones capitulares.<sup>35</sup>

De la misma manera, el gobernador intendente, aceptando o modificando las elecciones concejiles, podía intervenir a favor de uno u otro partido al interior de la corporación de vecinos, pudiendo de esta manera modificar la constitución de su cuerpo político. Esto sucedió especialmente con Andrés Mestre en la década de 1780, tanto desde su cargo de gobernador de Córdoba del Tucumán, como de gobernador-intendente de Salta del Tucumán. Desde el nombramiento de los delegados del gobernador en el cabildo, tanto el alcalde mayor como el gobernador de armas, así como también en la confirmación de cargos, esta autoridad provincial podía arbitrar en el gobierno de la ciudad y limitar su autonomía.<sup>36</sup>

A través de las reformas, se limitaba el poder "ejecutivo" de los regidores en la economía y la función de policía, con una multitud de nuevos empleos de cuño más administrativo que patrimonial.<sup>37</sup> La cultura jurisdiccional no era cuestionada; al contrario, se multiplicó la cantidad de oficios con jurisdicción extraordinaria delegada directamente por el rey en el ejercicio de la potestad, en tanto se limitaba el alcance de las jurisdicciones ordinarias de los empleos de la República. La misma configuración de la administración de la justicia no sufrió modificaciones, ya que se consideraba que el modelo era correcto y lo que hacía falta no era más que la correcta observancia de

<sup>35</sup> Sobre el tratamiento de Ilustre al cabildo de Tucumán, año 1795, AHT, Actas Capitulares, tomo XII, fols. 112-17; Comunicación del Gobernador negando la facultad dada al cabildo para la elección de ocho alcaldes de la Hermandad, Salta, año 1795, AHT, Actas Capitulares, tomo XII, fol. 115; y Se ve un oficio del Gobernador en que ordena se elijan 6 Alcaldes de la Hermandad, Salta, año 1795, AHT, Actas Capitulares, tomo XII, fol. 117v.

<sup>36</sup> Oficio de Andrés Mestre solicitando al cabildo su colaboración para solventar las milicias que debían enviarse al Alto Perú "para que con su auxilio se vea más desembarazado dicho Gobernador de Armas," Salta, año 1781, AHT, Sección Administrativa, vol. 9, fol. 354; El Gobernador Mestre instando a disipar los conflictos en el seno del cabildo, Salta, año 1781, AHT, Actas Capitulares, tomo X, fols. 290-91; Diligencias seguidas por el desobedecimiento del cabildo hecho por las órdenes del Gobernador sobre depósito de las varas, San Miguel de Tucumán, año 1796, AHT, Actas Capitulares, vol. XII, fols. 124-45v; y Conflicto con el Escribano, restituido en su cargo por el Gobernador Intendente, San Miguel de Tucumán, año 1797, AHT, Actas Capitulares, vol. XII, fols. 207v-22.

<sup>37</sup> Pietschmann, *Las reformas borbónicas*; y Socolow, *The Bureaucrats of Buenos Aires*, 31.



las leyes y, fundamentalmente, garantizar el comportamiento de los jueces. La justicia siguió en el centro del concepto de gobierno hasta bien avanzado el período independiente.<sup>38</sup> Tío Vallejo señala de qué manera las reformas favorecieron la autonomía del cabildo tucumano y reforzaron la construcción de una identidad territorial, al favorecer su sentimiento de pertenencia como entidad política separada de la gobernación intendencia: "Las reformas brindaron al gobierno capitular instrumentos nuevos de racionalización que fueron utilizados en beneficio del poder local, por ejemplo en lo que hace a la organización de sus recursos. Así la eficacia de las reformas en algunos aspectos de la administración no fue contradictoria con el reforzamiento del poder capitular."<sup>39</sup>

Otro problema generado en torno a las reformas, que ha sido recalcado sobre todo por los discursos políticos del temprano siglo XIX, fue la limitación del acceso a los empleos del Real Servicio a los españoles peninsulares, dejando afuera a los españoles americanos. Pero para plantear la separación entre españoles y criollos en el cuerpo político finisecular, es necesario mensurar el espacio político del que se habla y su alcance. En esta nueva estructura de funciones y empleos que dependían directamente del rey, se prefirió a los españoles sobre los criollos a la hora de ocupar los cargos. Esto fue así especialmente—y casi exclusivamente—en los empleos de las reales audiencias, donde era significativo respetar la ajenidad social que garantizaba la recta administración de justicia. Eso equivalía no sólo a preferir a los españoles europeos en la administración de la justicia del rey, sino también a notables originarios de otras ciudades distintas a donde ejercería el empleo.

En las oficinas y juntas, tanto como en las milicias, la mayoría de los cargos eran ocupados por españoles americanos. En los casos en que la proporción de españoles europeos era mayor, no lo era por una política de preferencias sino porque, precisamente, había muchos nuevos españoles peninsulares como parte de los cuerpos políticos de las ciudades. Fundamentalmente, los "criollos" eran, precisamente, "los españoles americanos." Tal como fue señalado en la Representación del Ayuntamiento de México de 1771, "españoles europeos y americanos forman un solo cuerpo político," por lo que la pretensión de reservar los oficios de justicia solamente para los españoles europeos significaría "querer mantener dos cuerpos [europeos y americanos] separados e

<sup>38</sup> Garriga, "Los límites del reformismo borbónico," 798-99.

<sup>39</sup> Tío Vallejo, "Presencias y ausencias del cabildo," 242.



independientes bajo una Cabeza, lo que es una monstruosidad política."<sup>40</sup>

Lo significativo en este punto es que esta separación que tomaba forma de privilegios para los españoles europeos sobre los americanos a la hora de ocupar cargos, se trató de una práctica contraria al espíritu de las leyes. El teniente de letras del gobernador intendente de Arequipa elevaba su opinión sobre la situación social y de gobierno de América en 1809, en ocasión de la consulta al país realizada por las cortes de Cádiz. El asesor consideraba a éste como uno de los defectos del gobierno del rey en América, dado que las Leyes de Indias "prefieren [a los americanos] en todos los empleos."<sup>41</sup>

A las pretensiones de los criollos de ocupar los empleos de Real Audiencia y demás de la estructura real de control y fiscalización, Carlos Garriga le llama "derecho de prelación," que fue objeto de numerosos escritos desde el siglo XVII: "Como es común a la jurisprudencia de Antiguo Régimen, los juristas criollos manipulan los elementos decantados por la tradición para construir sus pretensiones como derechos."<sup>42</sup> Este se montaba en la relación entre identidad y derecho propio, que argumentaban los criollos para defender las pretensiones de los notables de las ciudades, instrumentada en un discurso eminentemente jurídico. Tales pretensiones, a fines del siglo XVIII, tomarían la forma del discurso criollo en defensa de la identidad de una comunidad asociada al territorio, el derecho de los ciudadanos a participar en los honores del gobierno de la ciudad. Las reformas borbónicas no cuestionaban el criterio legitimador tradicional, de honores, que permitía a los vecinos acceder a los oficios de gobierno. La instrucción dada al Virrey Juan José de Vértiz en 1778, por ejemplo, dice en el Artículo XVI que se prefiera a los descubridores y sus descendientes y los pobladores más beneméritos para que "todos tengan satisfacción y no haya descontentos a la hora de proveer y repartir oficios y salarios." También en el Artículo XXIX se solicita se informe

<sup>40</sup> Citado por Garriga, "Los límites del reformismo borbónico," 809.

<sup>41</sup> "Oficio de Antonio Luis Pereyra al rey," en Cailliet-Bois, *Mayo Documental*, 197.

<sup>42</sup> Carlos Garriga, "El derecho de prelación: en torno a la construcción jurídica de la identidad criolla," en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: San Juan, 21 al 25 de mayo de 2000*, ed. Luis E. González Vale (San Juan: Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 2003), 2:1085-128; y Garriga, "Patrias criollas, plazas militares," 75.



"sobre personas beneméritas para premiarlas con cargos." Lo mismo se repitió en las Instrucciones de 1784 y 1790.<sup>43</sup>

Esa extensión de jurisdicciones extraordinarias a la que se hizo referencia fue motivo de muchas quejas por parte de las justicias, tanto de la República como del rey, al sustraer cada vez a más personas de la jurisdicción ordinaria, que quedaba casi sin aplicación. La Real Audiencia de México sugería en 1782 que:

conviene mucho restituirlas a su primitiva autoridad, que se ha disminuido notablemente con los fueros concedidos en todos los ramos de la Real Hacienda, de Correos, Alcabalas, Tabacos, Naipes, Pólvara y todas las Oficinas, Secretarías y Tribunales de Cuentas, de manera que la jurisdicción ordinaria sólo la reconoce la menor parte del *distinguido pueblo*, y viene a quedar, sobre la *ínfima [del pueblo]*, que también se va exceptuando con el establecimiento de Milicias.<sup>44</sup>

Una característica común de los oficiales de estas agencias y juntas civiles y de las milicias reformadas era la posesión de fueros. Estos fueron originalmente los fueros militares, que les permitían abstraerse de la justicia civil y a la vez conseguir algunas prerrogativas y ventajas comparativas de las que estaban desprovistos los oficios concejiles. El problema que estas prerrogativas generaban tenía que ver con las competencias de las justicias, en tanto la progresiva territorialización del aparato jurisdiccional se oponía conceptualmente a los fueros. Precisamente, la principal ventaja comparativa que otorgaban los fueros era la posibilidad de que el agente en posesión de fueros pudiera abstraerse de la justicia ordinaria a favor de los remozados tribunales militares. Desde la Real Ordenanza de Intendentes, e incluso antes, los nuevos hombres al servicio del rey gozaron de fueros militares y de guerra. Ellos eran, principalmente, los intendentes, sus mujeres, hijos y criados; y los ministros, subalternos y

<sup>43</sup> Edberto Oscar Acevedo, "Las instrucciones a los virreyes rioplatenses," en Barrios Pintado, *Derecho y administración pública*, 55-73. Un caso planteado para un vecino de San Miguel de Tucumán puede verse en Pertrechos y situados de tropas, Vicente Escobar y Embila, Coronel de Milicias del Regimiento de Caballería, 30 de noviembre de 1783, Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante citado como AGI), Buenos Aires 530.

<sup>44</sup> Representación de la Real Audiencia de México, 1782. Citado por Garriga, "Los límites del reformismo borbónico," 816; énfasis añadido por la autora.



dependientes de Rentas Reales. A partir de 1805, el privilegio de los fueros también abarcó a los "trabajadores, empleados y dependientes de sus reales obras."<sup>45</sup>

El punto culminante en la multiplicación de privilegios fue la extensión de fueros a las milicias reformadas. Las milicias habían sido reformadas en la península en 1734. Recién en 1766 fueron extendidas al territorio americano al establecer las Milicias Provinciales, que aumentaban a cuarenta y dos los regimientos de Castilla.<sup>46</sup> El sentido de esta reforma era modificar la forma de defensa y hacerla extensiva como obligación a todos los pobladores:

La fuerza verdadera para frustrar la conquista de un país no consiste en las murallas, ni en el valor de las guarniciones, sino en la que tenga y *encierre en sí mismo el país para concurrir en todo a la defensa* tanto atendiendo a la calidad del terreno para la defensa de pasos precisos, producción, víveres, acopio y medios de conducirlo, como al *número de habitantes divididos en clases*, para que cada uno sea útil al servicio de la patria en caso de guerra....<sup>47</sup>

El primer intento de convertir las "milicias a pie disciplinado siguiendo el modelo español" fue en 1763, en Cuba. El reglamento más minucioso fue precisamente el de Cuba de 1769, dictado según Real Cédula. En él se encontraban detallados los funciones, los privilegios y los fueros que debían gozar los individuos de los regimientos.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Real Decreto concediendo el fuero privilegiado a los trabajadores, empleados y dependientes de sus reales obras*, Archivo Histórico Nacional de Madrid (en adelante citado como AHNM), Consejos suprimidos, leg. 2489. Disponible en <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=001047>; consultado el 16 de octubre de 2008. Véase Garriga, "Patrias criollas, plazas militares," 49.

<sup>46</sup> *Ordenanza de S.M. de 31 de enero de 1734 sobre la formación de 33 regimientos de milicias*, AHNM. Disponible en <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=004034>; y *Reglamento del nuevo pie en que S.M. manda se establezcan los Cuerpos de Milicias Provinciales, aumentándolos hasta de dos regimientos en las provincias de la Corona de Castilla*. Disponible en <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=005040>; consultado el 16 de octubre de 2008.

<sup>47</sup> Discurso del Conde de Riela ante la Junta de América. Citado por Garriga, "Patrias criollas, plazas militares," 103; énfasis añadido por la autora.

<sup>48</sup> *Reglamento para las milicias de infantería y caballería de la Isla de Cuba, aprobado por S. M. y mandado que se observen inviolablemente todos sus artículos, por Real Cédula de 19 de enero de 1769—Fuero militar*, Biblioteca Nacional de



Para el virreinato del Perú, el Virrey Manuel de Amat había enviado un reglamento desde Lima en 1767, que fue recibido en Córdoba ese mismo año pero no se proyectó en ningún plan en las demás ciudades. El reglamento recién fue modificado en 1801, pero sin alterar los privilegios de los milicianos.<sup>49</sup> Las compañías regladas presentaban listas de milicianos, pero estos no estaban en función o con preparación sino solamente "en potencia," es decir, los hombres pasibles de ser reclutados en sus jurisdicciones. Esto cambiaba totalmente el concepto mismo de defensa y, sobre todo, la participación no sólo de los vecinos sino de todos los hombres para la defensa de "rey, haciendas, casas y familia," incluida la plebe. Esto tendría especial trascendencia en la deconstrucción y reconstrucción de los grupos privilegiados en las ciudades, de manera no poco conflictiva.

En San Miguel de Tucumán, eso se hizo patente especialmente en 1781. Esta fue la primera vez que estos cuerpos de milicias disciplinadas tuvieron una actuación efectiva, más allá de realizar colectas. Dicha actuación fue en torno al reclutamiento para el sofocamiento de los alzamientos altoperanos. A principios de febrero, el cabildo de San Miguel de Tucumán había recibido la orden del virrey fechada el 29 de enero, para que enviara cien hombres a Charcas.<sup>50</sup> La ejecución de esta orden estaba a cargo del gobernador de armas, Fermín Tejerina. Éste no era reconocido por los vecinos como un notable, aunque había conseguido empleos en la Junta de Temporalidades en 1772 y, posteriormente, había sido asignado como comandante del regimiento de Dragones de Famaillá en 1778—todos ellos empleos de las nuevas estructuras borbónicas que dependían directamente del rey.<sup>51</sup> Los capitulares, miembros de las familias más principales, se negaron a colaborar con él, llegando al punto de lograr el fracaso de este comandante de armas en el reclutamiento y disciplina de los hombres que debían enviar a La Paz. Interpusieron queja al gobernador de armas

Madrid. Disponible en: <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=037394>; consultado el 16 de octubre de 2008.

<sup>49</sup> Marcela González, *Las deserciones en las milicias cordobesas, 1573-1870* (Córdoba: CEH, 1997).

<sup>50</sup> Orden del Virrey para que sin demora marchen a Chiquisaca 100 hombres y que se verifiquen sus salidas, Salta, 29 de enero de 1781, AHT, Sección Administrativa, vol. 9, fol. 353. Véase Romina Zamora, "Fuego en las montañas, 1781: la participación de la plebe del Tucumán en las sublevaciones andinas," *Contrastes: Revista de Historia Moderna* 13 (2004-2007):9-35.

<sup>51</sup> María Lelia García Calderón, "Familia y poder en Tucumán a fines del periodo colonial: en torno a Campero y la Junta Municipal de Temporalidades," mimeo; y Tío Vallejo, *Antiguo Régimen y liberalismo*, 97.



y, aunque no se le destituyó, por orden del virrey se nombró como justicia mayor *ad hoc* a don Juan Silvestre Deheza y Helguero, miembro del partido capitular integrado por los principales, y opositor a Tejerina, con las mismas funciones.<sup>52</sup>

Los oficiales de esta nueva estructura borbónica de gobierno y administración podían eximirse de ocupar los empleos de cabildo; en tanto, un cargo que dependía del rey era incompatible con los oficios del gobierno de la ciudad. Esto era así principalmente con los oficios de Justicia y Real Hacienda. A la inversa, un cargo de la República no eximía a los vecinos de ejercer un cargo al servicio del rey.<sup>53</sup> Esto ponía a los capitulares frente a una situación paradójica: si bien muchos de los oficiales borbónicos en esta ciudad no eran considerados por los principales como parte de la corporación de vecinos, la cabeza de este cuerpo, el cabildo, no estaba dispuesta a renunciar a la prerrogativa de poder elegir de su vecindario a quiénes ocuparían los empleos concejiles.

En definitiva, las quejas de los capitulares denostaban la injerencia del rey en funciones consideradas privativas de la República. Los múltiples cargos al Real Servicio ocupaban hombres que los capitulares consideraban como necesarios para el gobierno de la República, y que se excusaban para no ocupar funciones capitulares, argumentando la posesión de fueros:

...Dijo el Alcalde de 2º voto que habiendole enseñado la experiencia lo difícil que se hace seguir las causas a los reos porque los vecinos más pudientes y que mejor puedan desempeñar los ministerios de fiscal y Defensor,

<sup>52</sup> Oficios varios, AHT, Actas Capitulares, tomo X, fol. 296v; y Nombramiento de Juan Silvestre Deheza y Helguero por parte del virrey, ordenándose comunicar esta resolución al actual Gobernador de Armas, don Fermín Tejerina, 9 de abril de 1781, AHT, Actas Capitulares, tomo X, fol. 299v.

<sup>53</sup> Exención de servicio personal y cargas concejiles y vecinales a los estanqueros, promulgada el 24 de septiembre de 1779, AHNM, Fondo Contemporáneo, Ministerio de Hacienda, lib. 8031, núm. 2918, pág. 271. Disponible en <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=043093>; consultado el 12 de noviembre de 2010; y "Real cédula de S.M y señores del Consejo por la cual se declara por punto general que a los que ejercen algún oficio de Republica no les exime en manera alguna de los cargos y obligaciones de que deba responder como otro cualquiera de los demas individuos de Ayuntamiento," promulgada el 7 de marzo de 1784, Universidad Autónoma de Madrid, Gaceta de Madrid, 1784-04-06. Disponible en <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=000516>; consultado el 12 de noviembre de 2010.



unos se disculpan o por viejos o por muchas ocupaciones, y otros, que son los más, *procuran evadirse con varios títulos que obtienen de varios ramos de Real Hacienda, militar, cruzada, etc....*<sup>54</sup>

También, a través de los conflictos entre las jurisdicciones de los nuevos oficios reales y las antiguas de la república local, se hacían evidentes los enfrentamientos internotabliares entre los mismos vecinos. Principalmente se oponían dos partidos: las familias tradicionales de notables que estaban en el centro del cuerpo político local y los nuevos sujetos que consiguieron un espacio de visibilidad y de poder en empleos al real servicio, como en el caso citado.<sup>55</sup> Pero como señala Jorge Gelman, una de las contradicciones intrínsecas a la nueva organización fue que la Corona no proveyó los medios materiales de promover la fidelidad y la honestidad de los nuevos oficiales del rey de segunda línea, especialmente aquellos que estaban lejos de los centros de gobierno real. Así, estos oficiales terminaron siendo cooptados por las repúblicas locales, o éstas pusieron directamente a sus miembros en el aparato administrativo del rey a nivel local.<sup>56</sup>

En San Miguel de Tucumán, hacia comienzos del siglo XIX, la corporación de vecinos había fagocitado, además, a todos los hombres a cargo de las jefaturas de las milicias de tal manera que el poder en la ciudad siguió recluido al interior del ámbito doméstico.<sup>57</sup> En 1800, el cabildo de San Miguel de Tucumán, a través de los tres regidores, el alcalde de 1º voto y el asesor letrado, solicitó al virrey que quitara los

<sup>54</sup> Alcalde de segundo voto propone que por la cortedad del vecindario todos los que se consideran exentos de Cargas concejiles deban servirlos, San Miguel de Tucumán, 29 de enero de 1799, AHT, Actas Capitulares, vol. XII, fol. 330; énfasis añadido por la autora.

<sup>55</sup> Véase Eduardo Saguier, "La lucha contra el nepotismo en los orígenes de las reformas borbónicas: la endogamia en el cabildo de Salta y Tucumán, 1760-1790," *Andes* 5 (1992):89-124; Tío Vallejo, "La buena administración de justicia," Cristina del Carmen López, "Redes familiares y poder en el Tucumán de comienzos del siglo XIX," en *Representaciones, sociedad y política en los pueblos de la república: primera mitad del siglo XIX*, ed. Irene García de Saltor y Cristina López (Tucumán: Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2005); y la obra de Romina Zamora, "El vecindario y los oficios de gobierno."

<sup>56</sup> Gelman, "La lucha por el control del estado."

<sup>57</sup> Toma de razón de despachos reales a favor de los oficiales del Regimiento de Milicias disciplinadas de Voluntarios de la caballería de la ciudad de Tucumán, 1803-1805, AHT, Caja Complementaria, Fondo Adm., caja 5, exps. 2 y 6.



fueros de veintisiete vecinos de esta ciudad con oficios en la administración real para poder obligarlos a cumplir con los servicios a la Patria, es decir, ocupar cargos concejiles. Se debe tomar en cuenta que en el pueblo no había más vecinos principales que ellos para ocupar cargos porque "los demás son unos Infelizes."<sup>58</sup>

No era la primera vez que el cabildo recurría a la autoridad monárquica para dirimir conflictos internos, pero lo novedoso de este caso es que solicitaba al virrey no que interviniera, sino que se retirara de su jurisdicción. Si se analizan las relaciones sociales de estos mismos sujetos denunciados, se puede ver que por lo menos el 60 por ciento estaban emparentados o se emparentarían en los años inmediatos con aquellos regidores y aquel alcalde que los denunciaban.<sup>59</sup> Se consideraba tanto al gobierno político de la ciudad como la conformación de su cuerpo político, la República, como una función exclusiva de sus miembros.

La respuesta de la Real Audiencia llegó canalizada a través del Gobernador Intendente Rafael de la Luz en 1804. En ella, el intendente resaltaba los límites de los fueros, es decir, que no todos los oficiales del rey gozaban de los mismos privilegios y excepciones, por lo que la República conservaba intacta su autoridad para cubrir los oficios concejiles:

Desempeñando la prevención que se me hace en carta acordada de 3 de marzo inmediato, pongo en consideración de VM que el vecindario de la ciudad de San Miguel de Tucumán no es tan reducido, ni son tantas las personas privilegiadas en él, que no haia expeditas las bastantes para llenar los Oficios publicos concejiles...porque bien podria saber aquel cabildo que las Milicias Urbanas no gozan ecempción, que las Provinciales no estan impedidas aunque se deba

<sup>58</sup> Cabildo del Tucumán dice que por la cortedad del vecindario no sea exempto de cargas concejiles, San Miguel de Tucumán, 1800, AGN, Tribunales, leg. 234, exp. 17; y Alcalde de segundo voto propone que por la cortedad del vecindario todos los que se consideran exentos de Cargas concejiles deban servirlos, San Miguel de Tucumán, 1799, AHT, Actas Capitulares, vol. XII, fol. 330.

<sup>59</sup> Jorge Corominas, "Los vascos en Argentina," en *Los vascos en América* (Buenos Aires: Fundación Vasco Argentina Juan de Garay, 1994), vol. 3; Cristina López de Albornoz, "Negocios familiares: redes mercantiles y redes de parentesco en el Tucumán colonial," *Revista del Departamento de Historia* 7 (1999):48-70; y Ana María Bascary, *Familia y vida cotidiana: Tucumán a fines de la colonia* (Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1999).



consultar su voluntad, que la Diputación de Comercio sólo es bienal y que los Síndicos de San Francisco, Mayordomos, limosneros no tienen privilegios....<sup>60</sup>

La injerencia del rey en el poder de los cuerpos políticos locales, que pretendían las reformas finiseculares, se veía así limitada por prácticas de gobierno muy arraigadas, fundamentadas en el consenso de Antiguo Régimen, con las que el mismo rey tenía que negociar a través de sus delegados. En efecto, el que se haya quebrado el antiguo consenso colonial no significa que la política de compromisos haya dejado de ser un método habitual en la relación entre el rey y las repúblicas. Como señala Pedro Pérez Herrero, la presión fiscal, por dar un ejemplo, no hubiese tenido éxito si los grupos de notables no hubiesen estado dispuestos a "donar" recursos a la Corona que se traducirían en el otorgamiento de privilegios y excepciones.<sup>61</sup>

De eso se trataba, en definitiva, el nuevo consenso entre el rey y los nuevos grupos locales de poder, que las reformas vinieron a configurar. Así, las nuevas estructuras de control de la administración, creadas por los Borbones, generaron tensiones al atacar los fundamentos de las relaciones entre los gobiernos de las ciudades y el rey. Esas contradicciones fueron resueltas por el cuerpo político de la ciudad, no con mecanismos institucionales sino por medio de la ampliación de esa red doméstica para abarcar a los nuevos oficiales al real servicio, que terminaron ligados, por relaciones de parentesco o de pseudoparentesco, al grupo de notables que estaba ya enraizado en la ciudad y que constituía su vecindario. En realidad, era un indicador de la vigencia de los mismos criterios de inclusión para acceder a los oficios de gobierno de un sistema que se estaba construyendo todavía con elementos de la cultura jurídica previa.

La relación entre poder político y autoridad social seguía intacta. Aún más, en algunos casos a fines del siglo XVIII fue más marcada la patrimonialización del gobierno de la ciudad al interior de una sola red familiar que durante el período preborbónico. De la misma manera, la capacidad de autogobierno de las ciudades de Antiguo Régimen, la autonomía de la república urbana, no estuvo bajo cuestión. Ni siquiera después de la *vacatio legis*, y de la apropiación de la

<sup>60</sup> Provisión de cargos concejiles especialmente el de Defensor de Pobres en la ciudad de Tucumán, Salta, 1804, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, C3- A2, nos. 1-109.

<sup>61</sup> Pedro Pérez Herrero, *La América colonial, 1492-1763: política y sociedad* (Madrid: Editorial Síntesis, 2002), 333.



soberanía por parte de las juntas, se cuestionaron los principios de autogobierno local. Esa misma autonomía de las ciudades, que fue central en la construcción de un Estado y de una nueva forma de representación, federal y republicana, había sido parte constitutiva de la monarquía corporativa.



# Anexo I

## Composición del cabildo de San Miguel de Tucumán, 1795-1806

Regidor Fiel Ejecutor: Pedro Antonio Araújo (desde antes de 1772 hasta 1806)

Alcalde Mayor Provincial: José Antonio Álvarez Condarco (desde 1784 hasta 1806)

Regidor 24: Juan García Cárdenas (desde 1777 hasta 1806)

Regidor Aiguacil Mayor: Joaquín Monzon

	1795	1796	1797	1798	1799	1800
Alcalde 1° voto	Tomo XII, fol. 92v Domingo García	Tomo XII, fol. 121 Josef Gramajo	Tomo XII, fol. 180 Ramón Molina	Tomo XII, fol. 233v Cayetano Rodríguez	Tomo XII, fol. 297 Josef Fabián Pérez	Tomo XII, fol. 340v Pedro Antonio de Zavalla
Alcalde 2° voto	Josef Gramajo	Ramón Molina	Cayetano Rodríguez	Josef Fabián Pérez *	Pedro Antonio de Zavalla	Bartolomé Araújo
Procurador general	Josef Pascual Alurralde	Cayetano Rodríguez	Francisco Araújo de La Madrid	Pedro Antonio de Zavalla *	Bartolomé Araújo	Pedro Gramajo
Alcalde General de Santa Hermandad	Xavier Silva	Xavier Villafañe (cpn. Ejército) Manuel Pereyra	Santiago Maciel Diego Bazán	José Pascual Alurralde * Manuel Fdz Carranza	Antonio Ferreiro Juan Benancio Laguna	Manuel Araújo de La Madrid Juan Bautista García Josef de Molina
Defensor Gral. De Menores y Pobres	Manuel de Figueroa	Miguel Viaña	José Drago	Bartolomé Araújo *	Gregorio Ferreira	
Alcaldes de Barrio 1° cuartel	Bartolomé Flores	Miguel Villarubia	Miguel Villarubia	Ramón Uvapa	Antonio Musfosa	Ramón Urquiza
Alcaldes de Barrio 2° cuartel	Santiago Riera	Martín José Valle	Vicente Gatisteco	Josef Calderón	Francisco Oliva	Francisco Cambaño
Alcaldes de Barrio 3° cuartel	Josef Antonio Palma	Juquin Gramajo	Nicolás González	Santiago Riera	Patricio Acuña	Valeriano Gil
Tasador de Costas	Martín Valle	Agustín Tabeiro	Agustín Tabeiro	Agustín Tabeiro	Agustín Tabeiro	Agustín Tabeiro
Alcalde de Santa Hermandad		Juan Bautista García	Juan García Cárdenas	Pedro Nolasco Córdoba *	Josef Domingo Ayala	Francisco Pérez Martínez
Monteros						
Chicligasta		José de Frías	José Miguel Medina	Andrés Villafañe *	Miguel Soto	Miguel Soto
Río Chico		José Lorenzo	Félix Mariano Herrera	Juan Clemente Santillán	Félix Sierra	Antonio Zelarain
Los Juárez		José Ignacio Ferreira	José Mariano Brito	Marcos Cajal	Simón García	Lorenzo Acosta
Barruacu		Antonio García	Manuel Arias	Rufino Acosta *	Mariano Suero	Miguel Palavecino
Trancas		José López	Nicolás Molina	José Manuel Arias *	Josef Pascual Heredia	Feliciano Rodriguez



	1801 Tomo XII, fol. 385v	1802 Tomo XIII, fol. 1	1803 Tomo XIII, fol. 21v	1804 Tomo XIII, fol. 39v Elección 1/11/03.	1805 Tomo XIII, fol. 67v Elección 1/11/04	1806 Tomo XIII, f 94
Alcalde 1º voto	Domingo García	José Ignacio Garmendia	Domingo Villafañe	Manuel Posse	Manuel Reboredo	Manuel Fernández Carranza
Alcalde 2º voto	José Ignacio Garmendia	Manuel Reboredo	José Gramajo	(Pedro B. Gramajo*) Cayetano Fernández Moure	Francisco Monteagudo	José Miguel Medina
Procurador general	Fco. Solano Carrizo	Pedro Antonio de Zavallia (*)	José Manuel Villegas Terán	José Molina	Lic. Nicolás Laguna	Manuel Méndez
Alcalde General de Santa Hermandad	Miguel Pérez Padilla	Diego Bazán	Narciso Monzón	Javier Robles	Miguel Aráoz	(se suspende el cargo)
Defensor Gral. De Menores y Pobres	José Miguel Medina *	Juan Bta. García	Juan Bta. García *	Nicolás Molina	Juan Bta. García	Agustín Francisco de Góndora
Alcaldes de Barrio 1º cuartel	Lic. Nicolás Laguna	José Manuel Terán	Francisco Domingo Camboño	Francisco Bores	Lic. Juan Bta. Paz	Ramón Urquiza
Alcaldes de Barrio 2º cuartel	Miguel Villarrubia	Miguel Villarrubia	Ramón Baga	José Ignacio Gancedo	Miguel Villarrubia	José Benito Iriarte
Alcaldes de Barrio 3º cuartel	José Antonio Palma	Justo Pedraza	Pablo Ramos	Francisco Sosa	Francisco Sosa	Ignacio Sosa*
Tasador de Costas	José Ramón Méndez	Bartolomé Flores	Valeriano Gil	Justo Pedraza	Ignacio Sosa	Agustín Tabeiro
Alcalde de Santa Hermandad	Agustín Tabeiro	Agustín Tabeiro	Gaspar Salinas	Gaspar Salinas	Gaspar Salinas	Juan Mariano Medina
Alcalde de Santa Hermandad	Norberto Delgado	Norberto delgado	Joaquín Gramajo	José Calderón	Pedro Nolasco Córdoba	
Chicligasta	Francisco Arrieta	Miguel Soto	Javier Robles	Benito Santillán	Andrés Villafañe	Miguel Mirallés
Río Chico	José Frías	Policarpo Díaz	Juan José Santillán	Félix Marino Herrera	Juan Fco. Gardel	Juan Celed. Santillán
Los Juárez	Lázaro Argañaz	José Ma. Brizuela	Félix García	Simón García	Policarpo Heredia	Francisco Campero
Burruyacu	Miguel Aráoz	Jerónimo Monasterio	Pedro Juan Ramírez	José Antonio García	Ramón Martínez	Marcos Iñeri
Trancas	Vicente Martínez de Iriarte	Feliciano Rodríguez	(J. Manuel Arias) Santos López	Manuel López Cobo	José Pascual Heredia	Francisco Javier Torres

FUENTES: AHT, Actas Capitulares, tomos XII y XIII, 1795-1806.

\*Se trataron de elecciones conflictivas o recusadas.